



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1999/NGO/101
11 de marzo de 1999

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
55º período de sesiones
Tema 9 del programa provisional

CUESTIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

Exposición presentada por escrito por la Unión Internacional
de Juventudes Socialistas, organización no gubernamental
reconocida como entidad consultiva de carácter especial

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición presentada por escrito que se distribuye de conformidad con la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[10 de febrero de 1999]

1. La violenta represión de la manifestación pacífica realizada en mayo de 1998 en el interior de la prisión de Drapchi, en las afueras de Lhasa, capital del Tíbet, es una prueba del absoluto menosprecio de China por el derecho a la libertad de expresión de los tibetanos. Existen informes confirmados de que 12 prisioneros murieron y muchos más quedaron heridos al disparar las fuerzas de seguridad chinas contra los prisioneros. Otras personas que habían participado en la manifestación tuvieron que soportar duras sanciones. La manifestación se llevó a cabo en momentos en que efectuaban una visita oficial tres embajadores de la Unión Europea, pero el monopolio chino de la información impidió que la delegación se enterara del incidente hasta después de dejar la región.

2. Después de la misión de los tres embajadores de la Unión Europea, visitaron también el Tíbet los miembros del Comité de Política Extranjera del Parlamento de Dinamarca, en agosto de 1998, y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson, en septiembre del mismo año. Se dice que las delegaciones visitantes expresaron su descontento ante las limitaciones impuestas a sus visitas por las autoridades chinas. Los informes indican ahora que las autoridades chinas han detenido a dos monjes del monasterio de Drepung por haber participado en la redacción de una carta dirigida a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. No se conoce el paradero de los monjes. Según otro informe, las condenas de prisión impuestas a tres tibetanos se aumentaron hasta en diez años a raíz de sus protestas contra el Gobierno chino hecha, durante la visita de los delegados de las Naciones Unidas a la cárcel, el mes de octubre.

3. El 5 de octubre de 1998 la República Popular de China firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata de un gesto bien recibido pero todavía no se han tomado las medidas necesarias para que las leyes y prácticas de China sean conformes a las normas internacionales. Las prácticas actuales violan dichas normas y, aunque se han hecho progresos en algunas esferas, es preciso aplicar de inmediato un mecanismo más amplio a fin de proteger los derechos humanos de los tibetanos. A pesar de la obligación de garantizar la libertad de expresión y de opinión de todos los ciudadanos, la República Popular de China ha violado activamente esos derechos.

4. Las enmiendas de 1996 al Código de Procedimiento Penal de China no contienen medidas de protección contra el arresto y la detención arbitrarios. Según información recibida por nuestra organización, la gran mayoría de los 135 tibetanos arrestados en 1998 fueron encarcelados arbitrariamente y se dirigieron contra ellos acusaciones ambiguas de "poner en peligro la seguridad del Estado". Se niega a esas personas, encarceladas por ejercer sus derechos fundamentales, muchos de sus derechos. Los procedimientos legales no se ajustan a las normas internacionales. Muchas veces se niega a los acusados la representación de un abogado, el derecho a recibir visitas y el derecho a presentar una apelación. Con frecuencia son sometidos a tortura a fin de obtener una "confesión" y muchos han sido detenidos sin procedimiento judicial de ninguna clase. En 1998 se anunciaron en el Tíbet 12 nuevos casos de esta clase de desapariciones, a pesar de la preocupación expresada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ante "tipo de desaparición" que estaba empezando a producirse en el Tíbet.

5. Según Amnistía Internacional, hay más de 500 presos políticos tibetanos en las cárceles chinas. La tasa de prisión por motivos políticos es mucho más elevada que en otras regiones bajo dominio chino. Esto da una idea de la amplia campaña de las autoridades chinas para eliminar toda oposición a la política oficial en el Tíbet.

6. La tortura constituye un profundo abuso de los derechos humanos puesto que, a pesar de ser parte en diversos convenios internacionales que prohíben dicha práctica, las autoridades chinas siguen apoyando tácitamente su uso en

los centros de detención y las prisiones. La más grave violación de los derechos humanos es poner fin a la vida. En 1998, 19 tibetanos murieron prematuramente mientras se hallaban detenidos. Doce de esas muertes fueron resultado de la supresión por los chinos de la manifestación pacífica efectuada en la prisión de Drapchi el 1º y 4 de mayo. Desde 1986 se ha tenido noticia de la muerte de unos 60 tibetanos conocidos que se encontraban detenidos.

7. Contrariamente a las normas internacionales y nacionales, el Gobierno chino no protege plenamente los derechos de los niños tibetanos. Debido a las dificultades de subsistencia, a lo insuficiente de los servicios y a las medidas discriminatorias aplicadas, se niega a muchos niños tibetanos el acceso a la atención sanitaria y la escolaridad. La salud de los niños tibetanos es inferior a la normal. En algunas regiones, la relación entre el peso y la edad ha sido calificada de "inaceptablemente baja" y, según los informes recibidos, la malnutrición crónica limita el crecimiento de los niños tibetanos.

8. La amplia represión de China contra la religión en el Tíbet se intensificó en 1998 con nuevos llamamientos para transformar al Tíbet en una región "atea" en la que debe prevalecer la "civilización espiritual comunista". Un número abrumador de 9.977 monjes y monjas han sido expulsados por oponerse a la campaña china de "golpes duros" emprendida en 1996 en los monasterios y conventos, según informes de las organizaciones de derechos humanos. Otro acontecimiento alarmante, del cual se informó en el diario Qinghai el 5 de octubre de 1998, fue que 49 de los monjes de más edad del monasterio de Youning, en la "Prefectura Autónoma Tibetana de Haidong" de la denominada provincia de "Qinghai", fueron "retirados" por las autoridades chinas. Esta medida parece constituir una seria amenaza a la continuidad de la tradición budista tibetana en el monasterio, puesto que los monjes de más edad cumplen una función decisiva en la transmisión de las enseñanzas religiosas. El Gobierno de la Región Autónoma del Tíbet anuncia que ha completado la reeducación de 30.000 de los 46.000 monjes y monjas del Tíbet, proceso que entraña suprimir en sus instituciones religiosas y viviendas todas las imágenes del Dalai Lama y luego prohibir que sea objeto de su lealtad y sus plegarias. Se les enseña que su dirigente espiritual es un "divisionista" empeñado en dividir la patria. Además, se les exige que reconozcan al Panchen Lama, que ha sido designado por Beijing, y que denuncien la reencarnación aprobada por Su Santidad el Dalai Lama, el niño Gedhun Choekyi Nyima, de 9 años de edad. Los que se niegan a hacerlo son castigados con la expulsión del monasterio o del convento o bien pierden sus puestos de trabajo.

9. El asentamiento de poblaciones chinas en el Tíbet es tal vez la amenaza más importante que ahora existe contra el pueblo tibetano en su conjunto. Si se permite que las autoridades chinas sigan aplicando sus actuales políticas de traslado de poblaciones, el Tíbet puede hacer frente a una marginación total, destino semejante al de Mongolia interior, Manchuria y el Turkeistán oriental (Xinjiang).

10. Los efectos de esta estrategia deliberada ya son evidentes. Se niega a los tibetanos el acceso al sector político en el cual se deciden las cuestiones importantes que los afectan. Como resultado de ello, son vulnerables a la explotación y a las políticas perjudiciales. El desarrollo económico general, catalizador de muchos de los asentamientos chinos, consiste en explotar las tierras y en destruir el modo de vida de la población indígena. La economía de subsistencia tradicional está siendo reemplazada por una "economía de mercado" en la cual no participan los tibetanos. La capacidad de subsistencia disminuye gravemente, lo cual pone en peligro todos los demás derechos.

11. El aumento de los asentamientos chinos, las políticas discriminatorias y el bienestar social insuficiente se combinan para crear un entorno económico hostil a los tibetanos. Más del 70% de los tibetanos de la Región Autónoma del Tíbet viven ahora por debajo de la línea de la pobreza. Los programas de desarrollo económico de China fracasan reiteradamente en cuanto a atenuar la pobreza y es preciso emplear nuevos medios de asistencia financiera.

12. A estas dificultades se añaden las duras políticas de impuestos que se aplican sin concesión alguna. Estas exigencias afectan gravemente a los tibetanos, pues a veces representan hasta la mitad de su salario. China piensa igualar los ingresos fiscales de la Región Autónoma del Tíbet con los del resto de la China y, puesto que tantos habitantes de la Región Autónoma viven en la pobreza, esta intención resulta evidentemente abusiva. Es indispensable que China modifique sus políticas tributarias y utilice el subsidio anual a la Región Autónoma del Tíbet para elevar el nivel de vida de los tibetanos. A menos que esto se consiga, no será posible asegurar la observancia de muchos derechos humanos fundamentales.

13. A pesar de ser parte en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, las leyes nacionales no crean para los tibetanos un entorno exento de discriminación. Algunas prácticas apoyadas por el Gobierno son claramente discriminatorias, en detrimento de los tibetanos. Éstos son víctimas también de prejuicios desfavorables en lo que se refiere a la atención sanitaria, lo cual afecta grandemente su desarrollo tanto cultural como físico. La continua entrada de poblaciones chinas también está teniendo por resultado la discriminación en el sector del empleo, y las autoridades chinas aún no han tomado medidas para corregir la situación.

14. A fines de 1998 la República Popular de China firmó los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Esto suscitó la esperanza de que pronto se aplicarían medidas efectivas para que las leyes nacionales chinas se ajustaran a las normas internacionales, poniendo fin a las actuales violaciones de los derechos humanos. La supervivencia cultural y física de la población tibetana del Tíbet está grandemente amenazada por las constantes violaciones de estos derechos. China debe ocuparse activamente de este problema. Es indispensable que prosiga la presión internacional a fin de alentar al Gobierno de China a que cumpla con las disposiciones de los Pactos y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales es parte China.

15. En conclusión, la Unión Internacional de Juventudes Socialistas insta a la Comisión de Derechos Humanos a que examine la posibilidad de designar a un relator especial para que investigue la situación de los derechos humanos en el Tíbet, como lo ha recomendado la Comisión Internacional de Juristas en su informe "Tibet: Human Rights and The Rule of Law" y lo ha propuesto el Congreso de la Juventud Tibetana. Instamos además a la Comisión a que censure a la República Popular de China por cometer violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y libertades fundamentales en el Tíbet durante más de los cuatro últimos decenios.
